



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 10/08/2020.

Radicado	08001-33-33-014-2020-00079-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	Aida Cecilia Castro de Hernandez
Demandado	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP-
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho el expediente de la referencia asignado a este juzgado previa formalidad de reparto.

PASA AL DESPACHO
A fin que se pronuncie acerca de librar o no el mandamiento de pago solicitado.

CONSTANCIA
Expediente físico con 52 folios y tres copias para traslado

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Último Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020).

Radicado	08001-33-33-014-2020-00079-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	Aida Cecilia Castro de Hernandez
Demandado	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP-
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES.

La señora Aida Cecilia Castro de Hernandez, actuando a través de apoderado especial, presenta demanda ejecutiva, tendiente a obtener de esta jurisdicción que se libre mandamiento de pago en aras de cobro forzoso de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla el día 13 de mayo de 2009, que condenó a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

Entendiéndose el proceso ejecutivo como el medio o instrumento judicial para obtener el cumplimiento forzoso de obligaciones de dar, hacer y no hacer, a favor de un acreedor y en contra de un deudor que no han sido cumplidas, basadas en un título ejecutivo simple o complejo, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible ante la justicia.

La doctrina define el proceso ejecutivo como seguidamente se cita a continuación:

"El proceso ejecutivo no tiene por objeto como el de conocimiento, declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya existe, reconocido en una prueba preconstituida. Carnelutti dice que los procesos ejecutivos tienen como fin "satisfacer una pretensión" y Chiovenda advierte que su finalidad es "lograr la actuación práctica de la ley".¹

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado, en reiterados pronunciamientos, entiende el proceso ejecutivo como a continuación se cita textualmente:

"El proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho subjetivo del ejecutante que consiste en la facultad de reclamar el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible contenida en el título ejecutivo y cuyo titular es el ejecutante acreedor; tiene por finalidad asegurarle a éste la satisfacción de su acreencia mediante la utilización de medios coercitivos legítimos y legales (art. 488 C. P. C.). A ello se debe que la obligación por cuyo cumplimiento se reclama o se pretender ejecutar ante el poder jurisdiccional del Estado debe tener esas tres características – obligación clara, expresa y exigible

¹ MONROY CABRA, Marco Gerardo Procesos Ejecutivos, declarativos y cautelares Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal N° 2. Pág. 50, 1984.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

*- las cuales se deben revelar o contener o en el documento si el título es simple
o en el conjunto de documentos si el título es complejo.²*

Descendiendo a estudiar la demanda ejecutiva formulada por la señora Aida Cecilia Castro de Hernandez, actuando a través de apoderado especial, solicita a éste despacho darle cumplimiento a lo proferido en la sentencia de fecha 13 de mayo de 2009 emanada del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, se liquide el crédito hasta la fecha de cumplimiento de la obligación, por una suma total de liquidación de \$445.597.006,68.

Advirtiéndolo el despacho, que la actora presenta la demanda ejecutiva el día 12 de marzo del 2020, es decir, en vigencia de Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.), pretendiendo el cumplimiento de la condena impuesta en sentencia proferida en el procedimiento del derogado Decreto 01 de 1984 (C.C.A.), es menester determinar si le asiste a este juzgado conocer del caso objeto del proceso.

Sobre el particular la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,³ en auto dictado por Importancia Jurídica, ha sentado precedente respecto de determinar la competencia en demandas ejecutivas como las que ocupa nuestra atención, providencia en la cual se contemplan, entre otros, los siguientes eventos:

“(…)

- a) *Puede ocurrir que el despacho que profirió la sentencia de condena haya desaparecido para el momento en que regresa el expediente del trámite de segunda instancia, caso en el cual la competencia la asumirá el que corresponda de acuerdo con la redistribución o reasignación que se haya dispuesto de los asuntos que este conocía, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.*
- b) *Si el proceso se encuentra archivado y ocurre la desaparición del despacho que profirió la condena, la competencia para conocer del proceso ejecutivo le corresponderá a aquel que se determine de acuerdo con el reparto que efectúe la oficina encargada de ello, en el respectivo Circuito Judicial o Distrito Judicial, según el caso.*
- c) *Ahora bien, en el caso de los procesos fallados en vigencia del régimen anterior, esto es, en vigencia del Decreto 01 de 1984, pero cuya ejecución se inició bajo las previsiones del CPACA, el procedimiento a seguir es el regulado en este último y en el CGP, puesto que pese a que la ejecución provenga del proceso declarativo que rigió en vigencia del Decreto 01 de 1984, el proceso de ejecución de la sentencia es un nuevo trámite. (subrayas por el despacho).*
“(…)”

Teniendo en cuenta las premisas planteadas en el auto arriba transcrito, el juzgado se estima competente para conocer de la solicitud de mandamiento de pago formulada por la accionante, por encontrarse cumplidos los presupuestos contemplados en la tercera hipótesis, a que se refiere el citado alto tribunal.

Sin más preámbulos, el despacho procede a estudiar la demanda ejecutiva en aras de proveer lo que en derecho corresponda.

² H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de fecha 2 de octubre de 2003, C.P.: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

³ Sección Segunda, Providencia de 25 de julio de 2016, C.P.: William Hernández Gómez,

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

El artículo 422 del Código General del Proceso aplicable por remisión del artículo 299 del CPACA, establece las condiciones *formales* y de *fondo* que debe reunir un documento para que de él se pueda predicar la existencia de título ejecutivo. Las condiciones formales buscan que los documentos que integran el título conformen unidad jurídica, que sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme. A su vez, las condiciones de fondo, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.⁴

A su turno el numeral 1º del artículo 297 del CPACA, considera título ejecutivo a las *“...sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.”*

Quiere decir lo anterior que, para que una obligación pueda demandarse ejecutivamente debe constar en un documento que provenga del deudor y que además, sea expresa, clara y exigible. Al respecto el Consejo de Estado ha sostenido:

“.....

1. Que la **obligación sea expresa**: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente.
2. Que **sea clara**: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor).
3. Que **sea exigible**: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta.
4. Que la obligación **provenga del deudor o de su causante**: El título ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor.
5. Que el documento **constituya plena prueba contra el deudor**: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, **la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho**. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester

⁴Consejo de Estado – Sección Tercera, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado al número 26.726. Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

complementarlo con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso”.⁵

Para que pueda ser viable la demanda ejecutiva, se necesita que los documentos que se pretendan hacer valer, contengan los requisitos establecidos en las normas anteriores.

Para demostrar las obligaciones incumplidas cuya ejecución se demanda, la ejecutante presentó entre otros los siguientes documentos:

- Copia autenticada de la sentencia de fecha 13 de mayo de 2009 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla.
- Copia autenticada del Edicto fijado el día 25 de junio de 2009.
- Copia autenticada del auto de fecha 27 de octubre de 2009 proferido por el honorable Tribunal Administrativo del Atlántico, magistrado Dr. Luis Eduardo Cerra Jiménez, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
- Copia autenticada del auto de fecha 19 de marzo de 2010 dictado por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, por el cual se obedece y cumple la decisión del superior.
- Copia autenticada del Acta de entrega de copias con constancia de ejecutoria y de ser primera copia presta mérito ejecutivo, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, fechada el 30 de octubre de 2017.
- Copia autenticada de la Resolución No. RDP 049713 del 29 de diciembre de 2016 “Por la cual se declara la inexigibilidad de la obligación e imposibilidad parcial de cumplimiento a fallo judicial del Sr(a) Castro de Hernandez Aida Cecilia...”, suscrita por la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP.

El título del cual pretende el demandante su solución de pago por vía ejecutiva se encuentra según su dicho contenido en la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, que si bien se aporta en copia autenticada, se advierte que adolece de la respectiva constancia de su ejecutoria.

Teniendo en cuenta que en lo que tiene que ver con procesos ejecutivos tendientes al cobro forzoso de obligaciones de dar, hacer y no hacer surgidas con ocasión a una condena ordenada por la jurisdicción contenciosa administrativa a través de un proceso ordinario, es requisito sine qua non que el título ejecutivo (sentencia ordinaria) sea aportada en debida forma por quien pretenda su cobro a través del proceso ejecutivo, como el caso sub examine.

Así el numeral primero del artículo 297 del C.P.A.C.A señala que constituyen título ejecutivo las **sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo**

⁵Sentencia del 22 de junio de 2001, Consejo de Estado, C.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 44001 23 31 000 1996 0686 01 (13436), Demandante: Eduardo Uribe Duarte, Demandado: Departamento de la Guajira.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Contencioso Administrativo mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Para determinar el término de ejecutoria el legislador previó como requisito el establecido en el numeral segundo del Artículo 114 del C.G.P señala:

“(...) 2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo **requerirán constancia de su ejecutoria.**”

Por lo antes anotado y al revisar exhaustivamente la foliatura del expediente, se observa que no se aporta la referida constancia de ejecutoria de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, cuya ejecución se pide con la presente demanda.

Así las cosas, esta Agencia Judicial considera en el caso sub-examine, para poder librar el mandamiento ejecutivo, se deben aportar **las providencias judiciales con la constancia de ejecutoria**, que se pretende tener como título ejecutivo, no siendo posible omitir este requisito, ya que éste es el documento idóneo, que permite establecer con certeza su firmeza, además, la firma del Secretario del Juzgado, al expedir la constancia, da fe que la actuación judicial ha logrado su ejecutoria.

Por tanto, se evidencia en el caso que nos ocupa, que la demanda ejecutiva no cumple con los requisitos formales que permitan iniciar su respectivo trámite procesal, como es aportar de manera completa y conjunta la sentencia debidamente autenticada junto con la constancia de su ejecutoria. En consecuencia esta agencia judicial se abstendrá de librar el mandamiento de pago solicitado por la parte actora.

De otro lado, al haberse presentado en debida forma poder para actuar se le reconocerá personería al abogado Jhonny Emiro Baños Paba como apoderado de la demandante, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 10 y 11 del expediente.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Catorce Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla.

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE de librar mandamiento de pago en favor de la señora Aida Cecilia Castro de Hernandez y en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP-, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, devuélvase la demanda y los anexos sin necesidad de desglose a la demandante, dejando copia completa de la misma y sus anexos, así como de las actuaciones para el archivo del Juzgado.

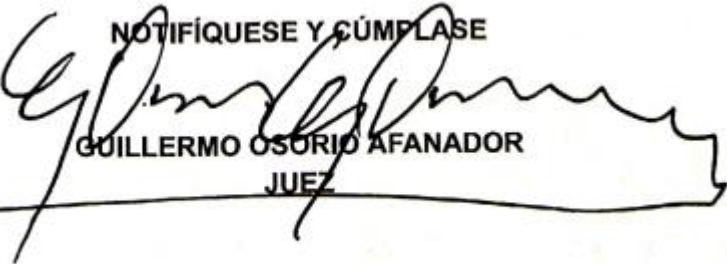
TERCERO: Se reconoce personería para actuar al abogado Jhonny Emiro Baños Paba⁶, como apoderado especial de la demandante señora Aida Cecilia Castro de Hernández, de conformidad con el poder por ésta conferido en legal forma (fls. 10 y 11).

⁶ De conformidad con lo señalado en la Circular PCSJC19-18 de fecha 9 de julio de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura, se realizó la consulta respectiva en la base de datos de Antecedentes Disciplinarios de Abogados.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

CUARTO: Notificar el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 083 DE HOY 11/08/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA